Aragón confía en que haya un primer pacto sobre financiación autonómica antes de septiembre

● Hacienda plantea «reinventar» el sistema. Las Comunidades, a favor de subir la presión fiscal para pagar sanidad y educación

MADRID. El objetivo es que haya una primera propuesta «técnica» de financiación autonómica en agosto, que las Comunidades y el Ministerio de Hacienda cierren un acuerdo «político» antes de noviembre y que los partidos en el Congreso puedan matizarlo y ratificarlo antes de que acabe 2017. Aunque con más de tres años de retraso, el Gobierno central y las Comunidades por fin han arrancado ya la reforma de la financiación autonómica.

El primer encuentro formal lo celebraron el pasado miércoles, con la constitución de la comisión de expertos que tiene que llegar a acuerdos tan básicos como, por ejemplo, determinar con los datos de población de qué año se decide el nuevo reparto del dinero. Tienen de plazo para hacerlo hasta agosto. La DGA se muestra confiada en conseguirlo.

El encuentro comenzó con dos puntos en el orden del día, que ante la falta de acuerdo acabaron posponiéndose para la siguiente reunión. El primero era fijar el índice del documento que tienen que pactar. El otro punto trataba de que las catorce autonomías representadas (todas excepto País Vasco, Navarra y Cataluña) eligiesen a tres de ellas para encabezar los trabajos. La propuesta la lanzó el presidente de la comisión de expertos, elegido por el ministro Cristóbal Montoro, y habría dejado a varias autonomías (posiblemente una de ellas Aragón) sin apenas margen de actuación. Todo apunta a que finalmente no se hará.

Desde el Ministerio de Hacienda apostaron por una reforma muy amplia del actual modelo. Según señalaron, plantearon «reinventar» el sistema de financiación autonómica con el objetivo de «fortalecer» el Estado del bienestar, en referencia a garantizar que las Comunidades puedan mantener los servicios en sanidad, educación y políticas sociales. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que junto a Montoro acudió al principio de la reunión del grupo de expertos, también se pronunció en esta línea.

Por su parte, diferentes autonomías coinciden en señalar que, para que sea viable la nueva financiación, la reforma debe ir acompañada de una reforma fiscal que aumente los recursos. Desde el Gobierno de Aragón, el presidente Javier Lambán ya se ha pronunciado a favor de que haya una reforma impositiva.

J. MORALES

Alain Cuenca: «Espero que lleguemos a un acuerdo técnico»

El profesor de la Universidad de Zaragoza Alain Cuenca –que es el experto nombrado por Aragón para representar los intereses de la Comunidad en el 'grupo de sabios' que tiene que sentar las bases de la nueva financiación autonómica– se mostró positivo tras la primera reunión del comité. «Espero que lleguemos a un acuerdo técnico que sea un documento abierto para que haya después una decisión política», señaló. En este sentido, las reuniones que ahora han comenzado debe establecer cuestiones como el año base que servirá para fijar el reparto del dinero entre las autonomías –que es una cuestión relevante para Comunidades como Aragón, que desde 2013 representa cada año una menor cuota de la población española– o el coste extra que conlleva la despoblación y el envejecimiento en el momento de prestar los servicios. Alain Cuenca definió la reunión del miércoles como «una toma de contacto» y señaló que los trabajos «se pondrán en marcha en marzo». Así, todo apunta a que la siguiente reunión que celebren será la segunda semana de marzo y en ella se producirá ya algún acuerdo. **J. M.**

EL INTENTO

3

El Gobierno ha propuesto al comité de expertos que los representantes de las 14 Comunidades que acuden (entre ellas, Aragón) deleguen en tres de ellos la elaboración de la ponencia principal. Todos se negaron, ya que cada autonomía tiene intereses diferentes.

UN ACUERDO EN 3 PASOS

Los expertos. Esta semana comenzó a trabajar el comité de expertos nombrados por Hacienda y las Comunidades. Todos son profesores expertos en la materia. Deben cerrar antes del 10 de agosto un acuerdo que siente las bases técnicas de la próxima financiación.

Sáenz de Santamaría y Montoro frente a los consejeros. El documento servirá de base para que el Consejo de Política Fiscal, que es un órgano político, intente cerrar el pacto que establezca qué recibe cada autonomía.

El Congreso de los Diputados. El pacto entre el Gobierno y las autonomías deberá conseguir el apoyo del Congreso. El objetivo es aprobar la ley antes de enero de 2018.